

Los regantes exigen a Narbona que retire el canon que gravará el agua

La Federación Valenciana que preside José Pascual Gil, concejal del PP en Castellón, reclama al Gobierno que recupere el anulado trasvase del Ebro




F. J. BENITO

El presidente de la Federación Valenciana de Comunidades de Regantes -entidad que agrupa a trescientas comunidades y 350.000 hectáreas de regadío-, y edil del PP en Castellón, José Pascual, exigió ayer a la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbonés, que dé marcha atrás y no apruebe la nueva Ley de Aguas con el texto actual, que grava el consumo de agua agrícola y, además, elimina el suministro hídrico del campo del orden de prioridades para el reparto del agua en España. Más de cien presidentes de las comunidades de regantes celebraron ayer una asamblea en Villena en la que se debatió sobre la precaria situación que atraviesa el sector agrícola y se firmó un manifiesto en el que, entre sus puntos, exigen al Gobierno la recuperación del proyecto para trasvasar agua del Ebro a la Comunidad.



Un momento de la asamblea de la Federación Valenciana de Regantes celebrada ayer en Villena

Servicios

-  [Enviar esta página](#)
-  [Imprimir esta página](#)
-  [Atención al lector](#)

[Anterior](#) [Volver](#) [Siguiete](#)

La asamblea se desarrolló en un ambiente de gran tensión aunque, finalmente, los regantes aplazaron llevar sus movilizaciones a la calle. La sequía ha provocado que las dos confederaciones hidrográficas que gestionan el agua de regadío -Júcar y Segura- hayan recortado un año más las dotaciones a las explotaciones agrícolas y en algunas comarcas como el Baix Vinalopó y la Vega Baja, los agricultores que riegan con aguas de trasvases (Tajo) lleven más de un año sin poder regar.

El presidente de los regantes, que estuvo acompañado por el vicepresidente Andrés Martínez, a su vez presidente de la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó, subrayó que «no se puede confiar en la naturaleza para que arregle el déficit hídrico y hasta ahora las medidas presentadas por el Gobierno son todas de carácter local y sectorial y no contemplan en su conjunto el ciclo hídrico como el ciclo integral del agua en el que todos los usuarios deben implicarse en su gestión».

Los agricultores denuncian que la nueva Ley de Aguas deja a los agricultores fuera de los órganos de decisión, algo que provocó la reacción del jefe del Consell, Francisco Camps, cediéndoles de manera simbólica el puesto de la Generalitat. Por su parte, Pascual denunció que «se haga política con el agua como moneda de cambio, en lugar de una auténtica política que solucione los problemas de los ciudadanos. En España hay agua para todos y renunciar a su aprovechamiento es una forma indecente de condenar a importantes territorios y, sobre todo, a las personas que los habitan, al más grave ostracismo y la pobreza».

Pascual recordó que los usuarios pagan «los embalses, los canales y todas las obras que son necesarias para el transporte del agua a sus campos, pero no estamos jamás dispuestos a pagar un duro por el agua en sí misma. El agua es pública y no

tiene propietario», en clara alusión al canon que pretende instaurar el Ministerio de Medio Ambiente por el consumo de agua para el campo. El presidente de Federación expuso que la principal preocupación de los regantes es «la situación hídrica» que existe en la Comunidad, donde se ha llegado «al límite». Para ello, puso como ejemplo que desde algunas confederaciones hidrográficas se haya ordenado «que se deje de regar» o se hayan establecido «una serie de restricciones graves al regadío».

Medidas En ese sentido, Pascual acusó a la Administración central, de la que dependen las confederaciones, de no tomar «las medidas para mitigar de forma global este problema», y reiteró que para los regantes «la única forma de lograrlo sería el trasvase del Ebro».

Por su parte, Andrés Martínez se refirió a la modificación de la Ley de Aguas, que es una transposición de la Directiva Marco del Agua, y criticó que el Gobierno haya introducido una serie de cuestiones en los últimos quince días que no se han tratado en los dos años de consultas. Para Martínez «estas prisas responden más a la necesidad de cumplir con un compromiso electoral, que a la de realizar una ley que merezca la pena», al tiempo que afirmó que, aunque su articulado «no está mal, la mayor participación de los regantes en la práctica no se consigue, puesto que se nos expulsa de los órganos de decisión». Palabras ratificadas por el presidente de la Federación. «Los usuarios nos oponemos a que se nos quiera ningunear en los órganos gestores del agua a los que pertenecemos y a que se nos ignore en los nuevos creados al amparo de la Directiva Marco del Agua».

Martínez criticó, por otro lado, que la nueva Ley de Aguas garantice el abastecimiento urbano «olvidándose de otros usos» y recordó que esto no es así en la directiva europea, que establece que se debe garantizar el abastecimiento «sin discriminar los usos». Los regantes mostraron por últimos su preocupación por la posible extensión del mejillón cebra detectado en Castellón a toda la Comunidad Valenciana, lo que aumentaría la crisis que sufren las explotaciones, sobre todo las de riego localizado. La Federación ha pedido la intervención de la Conselleria Territorio».